

DICIEMBRE 27 DE 1934

66ª REUNION — 8ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor JULIO A. ROCA,

Vicepresidente de la Nación

Ministro presente: de Hacienda, doctor Federico Pinedo.

Senadores presentes: Alberto Arancibia Rodríguez, Mario Bravo, Rudecindo S. Campos, Ramón S. Castillo, Francisco E. Correa, Atanasio Eguiguren, Francisco R. Galíndez, Laureano Landaburu, Lucio López Peña, Juan José Lubary, José Nicolás Matienzo, Alfredo L. Palacios, Robustiano Patrón Costas, Guillermo Rothe, Matías G. Sánchez Sorondo, Antonio Santamarina, Carlos Serrey, Juan R. Vidal, Benjamín Villafañe.

Senadores ausentes, con aviso: Mario Arenas, Carlos A. Bruchmann, Aldo Cantoni, Raúl Ceballos Reyes, Eduardo Laurencena, Pío Montenegro, Carlos R. Porto, Lisandro de la Torre, Cruz Vera, Horacio Vera Ocampo.

Senador ausente, sin aviso: Mariano P. Ceballos.

SUMARIO

- 1.—Acta.
- 2.—Asuntos entrados:
 - I.—Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar jueces de paz letrados en la Capital Federal.
 - II.—Comunicación de la Cámara de Diputados.
 - III.—Despachos de comisiones.
- 3.—Moción del señor ministro de Hacienda, para que se trate sobre tablas el despacho de la Comisión de Presupuesto en el proyecto de ley, en revisión, sobre impuesto a las ventas. Se aprueba.
- 4.—Asuntos entrados:
 - IV.—Peticiones particulares.
 - 5.—Integración de la Comisión de Presupuesto.
 - 6.—Consideración del asunto a que se refiere el número 3 de este sumario. Se aprueba.
 - 7.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley, en revisión, autorizando al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de \$ 5.760.000 m/n. en la construcción de varias obras en el puerto de Quequén. Se aprueba, quedando convertido en ley.
 - 8.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley, en revisión, autorizando al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de \$ 1.500.000 m/n. en las obras de dragado, rectificación y sistematización correlativas de los riachos que vinculan los puertos de Rosario y Victoria. Queda pendiente, por pasar el Senado a cuarto intermedio.
 - 9.—Apéndice.

—En Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de Diciembre de 1934, siendo la hora 16 y 10 minutos, dice el:

1

ACTA

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión. Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

Sr. Rothe. — Hago indicación de que se suprima la lectura y se dé por aprobada.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Habiendo asentimiento, así se hará.

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Acuerdo para designar jueces de paz. — Mensaje del Poder Ejecutivo

—Se lee:

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 1934.

Al Honorable Senado de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad a fin de solicitar, en las actuales sesiones extraordinarias, el acuerdo necesario para designar jueces de paz en la justicia de paz letrada de la Capital Federal, a los señores abogados: Alejandro A. Vázquez, actual secretario de juzgado en lo civil, y Tomás Pitt, en reemplazo, respectivamente, de los señores Anibal F. Leguizamón y Pedro P. Olivera, cuyas propuestas retira el Poder Ejecutivo por haberlo solicitado así los interesados.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.
Manuel de Iriondo.

—A la Comisión de Acuerdos.

II

Comunicación de la Cámara de Diputados

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN:

Sobre tasas de impuestos internos. (*A la Comisión de Presupuesto.*)

III

Despachos de comisiones

LEGISLACIÓN:

En el proyecto de ley, en revisión, sobre jubilaciones y pensiones de periodistas y gráficos.

En el proyecto de ley, en segunda revisión, sobre reformas a la ley de jubilaciones y pensiones ferroviarias.

PRESUPUESTO:

En el proyecto de ley, en revisión, prorrogando hasta el 31 de Diciembre de 1944 la vigencia de los impuestos a los réditos.

—En el proyecto de ley, en revisión, autorizando a la Universidad Nacional de Buenos Aires para invertir hasta la suma de 300.000 pesos, en concepto de subsidio extraordinario.

—En el proyecto de ley, en revisión, sobre impuesto a las ventas.

—Al orden del día.

3

IMPUESTO A LAS VENTAS. — MOCION

Sr. Ministro de Hacienda. — Pido la palabra.

Yo propondría, señor presidente, al Honorable Senado, quiera abocarse de inmediato a la consideración del despacho de que acaba de darse cuenta sobre impuesto a las ventas. Es un asunto por demás conocido y la urgencia de su sanción es evidente. Por otra parte, como la comisión aconseja enmendar el proyecto venido en revisión, en el caso de aprobarse su despacho, debería volver a la Cámara de Diputados, que si no pudiera tratarlo pronto, podría hacer peligrar considerablemente la recaudación fiscal en los primeros días de Enero.

Por esas consideraciones, hago moción de tratarlo sobre tablas.

Sr. Presidente. — Está en discusión la moción formulada por el señor ministro de Hacienda.

Sr. Eguiguren. — Pido la palabra.

Me voy a oponer a que se trate sobre tablas este proyecto. Es de una importancia extraordinaria; tiene repercusión en todas partes; no conocemos todavía el despacho de la comisión, cuya entrada en este momento acaba de darse. Que nos den por lo menos algunas horas para poder estudiarlo.

Yo me hago cargo de la situación en que se encuentra el señor ministro, sobre todo con la modificación, que obliga a devolver el proyecto a la Cámara de Diputados.

Me parece que podríamos tratar el asunto mañana y volverlo nuevamente a la Cámara

Diciembre 27 de 1934

CAMARA DE SENADORES

66ª Reunión. 8ª Sesión extraordinaria

de Diputados en donde se encuentran en situación distinta, porque ya lo han estudiado y considerado y podrán tratarlo inmediatamente cuando llegue.

Por estas breves consideraciones, me voy a oponer a que se trate sobre tablas.

Sr. Ministro de Hacienda. — Sería difícil, señor presidente, si no fuera tratado en el día de hoy, que pudiera ser considerado por la Cámara de Diputados en esta semana. El asunto, repito, es sumamente conocido, y la enmienda introducida por la comisión es la anunciada en los diarios hace varios días, y consiste en la reducción de la tasa a 1 $\frac{1}{4}$ % y en la supresión de una exoneración del impuesto.

Sr. Patrón Costas. — Pido la palabra.

La comisión acepta la indicación formulada por el señor ministro de Hacienda y está dispuesta a informar en la sesión de hoy.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor ministro de Hacienda.

Sr. Bravo. — Pido votación nominal.

Sr. Presidente. — Se va a tomar la votación nominal.

—Votan por la afirmativa, los señores senadores: Serrey, Patrón Costas, Arancibia Rodríguez, Santamarina, Castillo, Galíndez, Campos, Lubary, Vidal, López Peña, Rothe, Villafañe y Landaburu.

—Votan por la negativa, los señores senadores: Correa, Eguiguren, Palacios, Matienzo y Bravo.

Sr. Secretario (Figueroa). — Han votado 13 señores senadores por la afirmativa y 5 por la negativa.

Sr. Presidente. — Se tratará después de darse cuenta de los asuntos entrados.

4

ASUNTOS ENTRADOS

IV

Peticiones particulares

La Asociación de Aseguradores Extranjeros solicita la supresión de los impuestos internos diferenciales al seguro. (*A la Comisión de Presupuesto*).

—El Club Deportivo Pringles, de San Luis, solicita un subsidio. (*A la Comisión de Presupuesto*).

—La Cooperativa Agrícola Limitada Las Breñas (Chaco), solicita la creación de un juzgado letrado para ese territorio. (*A la Comisión de Justicia e Instrucción Pública*).

—La Comisión de Militares en Retiro del Ejército y la Armada, solicita que no se apruebe el descuento propuesto en sus haberes. (*A la Comisión de Presupuesto*).

—La Comisión Pro Defensa de los Barrios Inundados, de Tucumán, solicita la sanción del proyecto de ley en revisión acordando una suma para la construcción de canales. (*A la Comisión de Obras Públicas*).

—La Unión Linotipistas, Mecánicos y Afines, formula observaciones al proyecto de ley de jubilaciones de periodistas y gráficos. (*A sus antecedentes*).

5

INTEGRACION DE COMISION

Sr. Secretario (Figueroa). — El señor presidente ha designado al señor senador Galíndez para integrar la Comisión de Presupuesto.

6

IMPUESTO A LAS VENTAS

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto ha estudiado el proyecto de ley enviado en revisión por la Honorable Cámara de Diputados, por el que se establece un impuesto que se aplicará sobre las ventas de mercaderías, frutos y productos, realizadas en todo el territorio de la Nación Argentina, y por las razones que dará el miembro informante os aconseja su sanción con las modificaciones siguientes: en el artículo 9º, inciso a), se suprime «ladrillos, cal, arena, materiales de construcción en general y productos de aplicaciones higiénicas y medicinales» y se agrega después de productos frescos de la pesca: «jabones, dentífricos, sueros y vacunas». En el artículo 10 se reduce el impuesto del 2 % al 1,25 % para las ventas del mercado interno.

Sala de la comisión, Diciembre 27 de 1934.

R. Patrón Costas. — R. S. Campos. — F. R. Galíndez.

Proyecto de ley en revisión

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Establécese un impuesto que se aplicará sobre las ventas de mercaderías, frutos y productos, realizadas en todo el territorio de la Nación Argentina, en forma que incida

sobre una sola de las etapas de que es objeto la negociación de cada mercadería.

Art. 2º — El gravamen se aplicará sobre el precio neto de venta que resulte de la factura o documento equivalente, extendido por las personas obligadas a ingresar el impuesto.

Art. 3º — Se entiende por precio neto de las ventas de mercaderías el que resulte una vez deducidas las bonificaciones y descuentos hechos al comprador por épocas de pago u otro concepto similar, de acuerdo con las costumbres de plaza y siempre que dichas bonificaciones y descuentos se efectúen sobre ventas sujetas al impuesto, se contabilicen y facturen. Puede deducirse también del total de la venta el importe correspondiente a mercaderías y envases devueltos por el comprador.

Art. 4º — A los efectos de la aplicación de este impuesto, cuando las facturas o documentos no expresen el valor normal de plaza, la dirección podrá estimarlo de oficio, de conformidad con lo dispuesto por la ley 11.683.

Art. 5º — Son responsables directos del ingreso del impuesto:

- a) Los productores e industriales nacionales, por el impuesto correspondiente a la venta de mercaderías de su producción o manufactura;
- b) Los importadores, por el impuesto a las ventas de mercaderías importadas por cuenta propia o de terceros;
- c) Los exportadores, por el impuesto correspondiente a las mercaderías que salen del país por cuenta propia o de terceros.

Art. 6º — Cuando los importadores introduzcan al país mercaderías por cuenta de terceros, serán responsables del ingreso del impuesto desde el momento en que las mercaderías son retiradas de los depósitos de aduana. En estos casos y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9º de la ley 11.683, el impuesto se calculará sobre el valor, incluidos derechos y gastos facturados por el importador.

Art. 7º — Para determinar el monto del impuesto a pagar sobre las ventas en el mercado interno, se practicará una liquidación sobre la base del total de las ventas, efectuándose las siguientes deducciones:

- a) El importe de las bonificaciones, descuentos y devoluciones a que se refiere el artículo 3º;
- b) El importe de las ventas de mercaderías eximidas por la presente ley;

c) El importe de las compras de mercaderías gravadas con el impuesto de esta ley, adquiridas en el mercado interno o importadas en las condiciones del artículo 6º para ser elaboradas o transformadas, agregadas o utilizadas para producir o industrializar mercaderías para la venta;

d) El importe de las compras de mercaderías gravadas, adquiridas en el mercado interno o importadas en las condiciones del artículo 6º para ser revendidas en el mismo estado en que se compran. En estos casos se sumará al precio de compra un coeficiente de aumento que fijará la dirección;

e) El importe de los impuestos internos nacionales y provinciales abonados.

Art. 8º — El impuesto es adeudado desde el momento de la entrega de la mercadería o acto equivalente y se percibirá sobre la base de la declaración jurada, en la forma y plazos que fijará la dirección.

Cuando la mercadería es exportada en consignación, el impuesto es adeudado desde el momento del embarque y será liquidado en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo.

Art. 9º — Quedan eximidas del impuesto:

- a) Las ventas en el mercado interno de las siguientes mercaderías de producción nacional: ganados; aves y huevos; carne fresca; frutos del país; leña, carbón vegetal, carbonilla y tierra de carbón vegetal; tabacos, cigarros y cigarrillos; cereales y oleaginosas; hortalizas, legumbres y frutas frescas; semillas y bulbos; harina de trigo y de maíz, fideos, afrecho y afrechillo; pan, galleta común y productos similares de panadería; azúcar de caña y de remolacha; vinos genuinos; cerveza genuina elaborada con malta nacional y lúpulo; alcohol desnaturalizado para combustible; productos frescos de la pesca; ladrillos, cal, arena, materiales de construcción en general y productos de aplicaciones higiénicas y medicinales; leche fresca o pasteurizada, crema, manteca y queso; productos de granja elaborados dentro de un régimen de trabajo familiar y, en general, los productos de la ganadería y de la agricultura en tanto no hayan sufrido elaboración o tratamientos no indispensables para su conservación en estado natural o acondicionamiento;

- b) Las ventas de carbón mineral nacional o importado;
- c) Las ventas efectuadas a las cooperativas de consumo y las de las cooperativas de producción, constituidas de acuerdo a la ley número 11.388 e inscriptas como tales en el Ministerio de Agricultura;
- d) Las ventas efectuadas por entidades de beneficio público que no persiguen fines lucrativos, reconocidas como tales por la dirección;
- e) La venta de diarios, periódicos y revistas nacionales y extranjeras y libros de texto;
- f) Las ventas de acciones, títulos, divisas, valores, estampillas y billetes de lotería;
- g) El suministro de servicios públicos que sean materia de concesión oficial y cuyas tarifas estén aprobadas por los estados nacional o provinciales o por las municipalidades;
- h) Las ventas de los pequeños productores y artesanos, en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo.

Art. 10. — Fijase el impuesto establecido en el artículo 1º en el tres por mil sobre los productos o mercaderías vendidas o remitidas en consignación al exterior y en el dos por ciento para las ventas del mercado interno.

Art. 11. — Dentro de los treinta días de la promulgación de la presente ley o antes de la iniciación de un negocio o industria cuyas ventas estén sujetas a este impuesto, los responsables por el pago del impuesto estarán obligados a solicitar su inscripción en la Dirección General.

La inscripción podrá ser obligatoria para los revendedores, consignatarios, corredores, etcétera, los que quedarán sujetos a todas las obligaciones que establece la presente ley.

Art. 12. — La presente ley entrará en vigor el 1º de Enero de 1935. A partir de esa fecha, cuando las leyes mencionen la Dirección General de los Impuestos a los Réditos y a las Transacciones, se entenderá la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a cuyo cargo estará la percepción del impuesto de esta ley.

En tanto no se opongan a la presente, le son aplicables todas las disposiciones relativas al impuesto regido por la ley 11.680 contenidas en la ley 11.683.

Art. 13. — Los responsables enumerados en el artículo 5º abonarán solamente el impuesto del tres por mil sobre las ventas que hayan

efectuado antes del día 9 de Noviembre de 1934 mediante contrato extendido en documento público o privado, en el que conste el precio convenido y siempre que la entrega o factura de las mercaderías se realice en el primer semestre de 1935. Los responsables que tengan pendiente el cumplimiento de tales contratos deberán presentar dentro de los quince días de promulgada la ley, una declaración jurada en la que detallarán el número de los mismos y el importe de las mercaderías a entregar durante dicho semestre.

Art. 14. — El producido de este impuesto se distribuirá anualmente entre la Nación, la Municipalidad de la Capital Federal y el conjunto de las provincias, en la siguiente forma:

Hasta el año 1938: 82,5 % para la Nación y 17,5 % para la Municipalidad de la Capital Federal y las provincias.

Antes del 31 de Diciembre de 1938 se establecerán las proporciones en que se efectuará la distribución en lo sucesivo.

Art. 15. — La parte que corresponde a la Municipalidad de la Capital Federal y a las provincias, se distribuirá entre ellas en la siguiente forma:

- a) El 30 % de acuerdo con la población que a cada provincia asigne el último censo nacional aprobado por ley;
- b) El 30 % de acuerdo con el monto de los gastos presupuestos en 1934;
- c) El 30 % de acuerdo con los recursos percibidos por la provincia cada año inmediato anterior, con exclusión de los provenientes del crédito de 1934;
- d) El 10 % de acuerdo con la recaudación del impuesto a las ventas dentro de la jurisdicción de cada provincia, cada año inmediato anterior, computándose para el año 1935 lo que se haya recaudado en concepto de impuesto a las transacciones el año 1934.

A la Capital Federal se le asignará la participación aplicando los índices establecidos en los incisos a), b) y c).

Art. 16. — El Poder Ejecutivo liquidará trimestralmente a las provincias y a la Capital Federal las sumas que les correspondan por la aplicación de este impuesto. Dentro del plazo de cinco días a partir de la terminación de cada trimestre, el gobierno nacional depositará esa suma a la orden de los gobiernos respectivos, en el Banco de la Nación Argentina.

Art. 17. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la ley 11.683.

Art. 18. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANTENOR R. FERREIRA.
Carlos González Bonorino.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Sr. Campos. — Pido la palabra.

La moción que acaba de aprobarse en el sentido de que se trate sobre tablas el despacho presentado por la Comisión de Presupuesto, por el cual se aprueba la sanción venida en revisión de la Cámara de Diputados sobre el impuesto a las ventas, con pequeñas modificaciones, siendo la más importante la reducción de la tasa del impuesto del 2 % al 1 ¼ %, me obliga a informarlo de la manera más breve y sintética, dado que así lo aconsejan las circunstancias.

No es que la naturaleza de este gravamen no requiera una amplia deliberación, sino que la sanción del cuerpo, a la que debo sujetarme, por un lado; y por otro, la circunstancia muy especial de que el proyecto de ley debe volver a la Cámara de origen, si prosperara, como es de suponer, la modificación introducida, hace indispensable, por razones de urgencia — toda vez que el gravamen debe comenzar a regir el 1º de Enero, y estamos a fines del mes de Diciembre — que mi exposición no tome mayor extensión ni mayor tiempo, para que la ley pueda sancionarse en el tiempo hábil para su promulgación.

Disculpará, entonces, la Honorable Cámara, que en este informe puedan deslizarse algunas omisiones o deficiencias, imputables, más que todo, a las razones de hecho que acabo de enunciar.

Avocado el Congreso a dar una solución a este asunto, démosla con tiempo, y así cooperaremos a la política financiera en que está empeñado el Poder Ejecutivo nacional.

Dicho queda, con lo manifestado en el párrafo anterior, que este proyecto de ley, por el cual se crea un gravamen a las ventas, constituye la parte de un vasto programa financiero, que tiene como base esencial la unificación de impuestos internos, ley que acaba de sancionarse por el Congreso.

No se trata de un gravamen aislado que sólo tenga por objeto arrimar fondos a las arcas fiscales; no sería lógico ni racional que así se aprecie esta iniciativa. Corresponde a un plan

general; constituye uno de los principales soportes del edificio financiero que se construye en estos momentos con vistas hacia la unidad económica de nuestro país, que es tan anhelada como fué en su tiempo nuestra unidad política.

No sancionar este impuesto, que así responde a una nueva orientación en la faz económica de la República, importaría tanto como truncar la obra de reparación en que están empeñados, con tanto fervor patriótico, los hombres que hoy manejan con singular desprendimiento la cosa pública.

El impuesto a las ventas se ha creado en substitución del impuesto a las transacciones que hoy rige. No desconozco que la diferencia entre uno y otro es fundamental, pero se trata de un impuesto que puede decirse que es similar y que tiene consecuencias más o menos equivalentes: mientras el impuesto a las transacciones se ha calculado en 18.000.000 de pesos, el impuesto a las ventas, que se trata de sancionar en substitución de aquél, está presupuestado, más o menos, en la misma proporción y en la misma cantidad.

Se dice que este gravamen recaerá exclusivamente en el consumidor, y sin embargo; hemos visto en estos últimos tiempos, cómo han reclamado por su posible aplicación los comerciantes e industriales, argumentando, entre otras consideraciones, con que la gran mayoría de los productos no pueden afrontar el gravamen y que, por lógica consecuencia, los importadores e industriales son los únicos que van a soportarlo.

No es totalmente exacto, ni lo uno ni lo otro: el consumidor sólo resultará gravado en una pequeña proporción, por la circunstancia muy especial de que están eximidos de este gravamen los artículos de mayor aplicación, como ser: productos agrícolas ganaderos, tabacos, cigarros y cigarrillos, harina de trigo y maíz, afrecho y afrechillo, azúcar de caña y remolacha, vinos genuinos, cervezas genuinas, alcohol desnaturalizado, crema, manteca, queso, pan, galleta y productos similares, producción de pequeños artesanos, luz y fuerza, editoriales, diarios y revistas, carbón vegetal e industria pesquera y algunas otras excepciones que ha sancionado la Cámara de Diputados y que en parte no han sido aceptadas por la Comisión de Presupuesto.

En cuanto a los productores e industriales, tampoco ellos pueden reclamar de este impuesto, porque, indudablemente, lo harán incidir en determinada proporción en las ventas, en las formas que ellos tengan establecidas en su comercio.

En resumen, se trata de un impuesto que tiene una característica igualitaria, que lo hace soportable por el contribuyente sin mayor esfuerzo, no explicándome la causa que determina esa oposición, a no ser que ella se haga por razones políticas, que no es del caso comentar en esta ocasión.

Entre mantener el impuesto a las transacciones que actualmente rige y que ha dado motivo a resistencias y reclamaciones de toda índole, sobre todo por lo que respecta al comerciante minorista, las mismas que precisamente han determinado un decreto del Poder Ejecutivo, que debe ser regularizado por una ley, cuyo proyecto está a consideración de la Comisión de Presupuesto y la creación del impuesto a las ventas que, aunque similar, es de características distintas, la solución debe inclinarse por la substitución de aquél, con la sanción de este último, ya que, por razones que he dado al principio de este informe, la desaparición total de este recurso provocaría un déficit sin reparación posible dentro del régimen financiero actual.

Estoy seguro, señor presidente, ya que en este orden de ideas la política financiera del Poder Ejecutivo es una sola, estoy seguro, digo, que no se busca, como se cree, fuentes rentísticas para cubrir gastos o crear nuevos impuestos.

Por el contrario, las fuerzas políticas que apoyan al Poder Ejecutivo no pueden ser más moderadas dentro de esta orientación que ampliamente comparten; pero es el caso que no podemos olvidar que, con motivo de la sanción de la ley de unificación de los impuestos internos al consumo, se ha producido una desgravación que ha recargado en forma extraordinaria el presupuesto nacional, y de ahí que se tenga que afrontar esta situación mediante éstas y otras leyes impositivas que están a consideración del Congreso.

Este gravamen no es, por otra parte, sino una substitución del de las transacciones, sin que se altere mayormente su posible rendimiento. Una sola razón, que es fundamental, determina nuestra actitud en la emergencia y es la de evitar desequilibrios irreparables que no conciben con los propósitos que se abrigan de llevar adelante una política financiera de reajuste, reparando déficit de arrastre que todos conocemos.

El pequeño aumento que puede derivar de su aplicación, está con exceso compensado con la desgravación que va a producir la nueva ley de unificación de impuestos internos. Una de las mayores ventajas que se obtienen con este

impuesto a las ventas, es el de su simplicidad en el cobro, evitando los motivos de evasión del gravamen, que es la principal objeción que se hace al impuesto a las transacciones. Este último recaía sobre 200.000 contribuyentes que están catalogados en la sección correspondiente, mientras que el de las ventas recae tan sólo sobre 18.000 comerciantes. La diferencia es muy grande. Los responsables son, en su gran mayoría, comerciantes mayoristas, que tienen y llevan una contabilidad prolija, de manera que la evasión del impuesto es difícil que llegue a producirse y su percepción se hace fácil por el procedimiento adoptado.

El momento en que se liquida el impuesto no puede ser más sencillo ni más simple. Se liquida y se paga el impuesto en el momento de la entrega de la mercadería, o en el momento de su contabilización o de la facturación de la misma, según el caso.

Debo hacer notar que la característica principal de este impuesto es el de no gravar sino la primera venta comercial del producto. Se evita con esto que el gravamen se pague más de una vez, como ocurría actualmente con el impuesto a las transacciones, fuera de que este último castigaba todo acto o contrato que importara una transacción, aunque no fuera una venta.

Las diferencias entre uno y otro son, pues, fundamentales y su aplicación redunda en un doble beneficio, tanto para el contribuyente como para el fisco.

Por lo que respecta a su liquidación no puede ser más simple. Si se trata del productor, industrial, importador o exportador, ningún inconveniente puede presentarse. El impuesto se liquida y se paga al entregarse la mercadería.

Si se trata de un comerciante que fabrica artículos o productos elaborados con materias primas que haya pagado el impuesto y que deba por nuevas manipulaciones o transformaciones, pagar el gravamen del nuevo producto, la liquidación se hace por diferencia entre la venta y la compra con los descuentos que la misma ley autoriza. En la Cámara de Diputados se han dado algunos ejemplos que interpretan las disposiciones respectivas, de manera que no considero del caso extenderme en este punto.

Las ventas sujetas a este impuesto son las siguientes: a) Ventas de mercaderías efectuadas por importadores. Los responsables del pago son estos últimos, sea que introduzcan las mercaderías por cuenta propia o de tercero; b) Las ventas de mercaderías efectuadas por

productores e industriales nacionales. Estos están sujetos al régimen del impuesto a los réditos y sus declaraciones juradas evitarán la evasión del impuesto; y c) Ventas efectuadas por los exportadores. Los responsables son éstos, sea que la exportación la hagan por cuenta propia o de terceros.

Por lo que respecta a la modificación principal introducida y que consiste en el monto del gravamen impositivo que se reduce en el despacho del 2 % sancionado por Diputados al 1 $\frac{1}{4}$ %, ello ha sido consecuencia de largas deliberaciones entre el señor ministro de Hacienda y las comisiones desplegadas por los productores e industriales afectados por la sanción de esta ley, o sea por los responsables o contribuyentes. No es del caso, sobre todo cuando el señor ministro tendrá oportunidad de explicar ampliamente la razón que ha determinado la modificación en el monto del impuesto, dar cifras que no pueden ser sino aproximadas. Es cierto que, por lo que respecta al monto imponible, en los casos de importación de mercaderías o exportación de productos, puede hacerse un cálculo más o menos firme de lo que podrá producir este gravamen; pero en lo que respecta a la producción o fabricación nacional que se comercializa dentro del mismo país, no hay estadísticas y de aquí la enorme diferencia en el monto aproximado, según la base que se tome para su apreciación. Tampoco deseo detenerme sobre este punto, pues, como he dicho, el señor ministro de Hacienda, presente en el recinto, podrá explicar al Senado los fundamentos de esta modificación.

Voy a terminar, señor presidente. Los que estamos obligados a contribuir a las deliberaciones legislativas, en mérito a las representaciones que ejercemos, nos vemos a menudo discutidos en nuestra acción, sin que se aprecien debidamente las consideraciones de orden superior que determinan nuestros actos.

Al dar este informe y definir mi posición en este debate, lo hago, señor presidente, con la convicción más profunda de que cumplo con un deber de lealtad y patriotismo a la causa que defiendo. No se trata de un impuesto aislado que se sanciona para cubrir desaciertos financieros. No, señor presidente. Se trata de un impuesto que se dará al país con el loable propósito de financiar la unificación de los impuestos internos, cuya ley acaba de sancionarse, dejando sin efecto el impuesto a

las transacciones, que provocara tantas resistencias a su cumplimiento.

Ofrecemos, así, una nueva oportunidad para que se aprecie y se juzgue la buena fe con que afrontamos problemas tan fundamentales para el progreso y bienestar general del país.

Sr. Eguiguren. — Pido la palabra.

Realmente, los que no comulgamos con este proyecto, nos encontramos en una situación excepcional, difícil para afrontar este debate.

Pocas veces se pudo haber tratado un proyecto de tanta trascendencia, de modo tan informal. No tenemos siquiera frente a nosotros el despacho impreso de la comisión y no hemos podido prever esta situación para munirnos de los antecedentes necesarios que su consideración necesita. En esta situación, y sin habérsenos dado siquiera algunas horas para estudiar, entro a formular las observaciones que me sugiere el informe de la mayoría de la comisión.

El señor miembro informante comenzó diciendo que este gravamen era una consecuencia de la unificación de los impuestos internos. Exactamente lo que dije en la sesión anterior, y lo que anuncié el año pasado, que el proyecto de unificación no tenía como propósito realizar la unidad financiera y económica del país, sino asegurar al Poder Ejecutivo los dos fuertes impuestos que fenecían este año, el impuesto a la renta y el impuesto a las transacciones.

Los hechos me han dado completamente la razón y el señor miembro informante acaba también de confesarlo. Este impuesto es una consecuencia de la unificación, la que produce, dice, una desgravación del consumidor.

La verdad es otra, y ya dejamos puntualizado el asunto en la sesión anterior.

¿Puede o no producir un déficit al Poder Ejecutivo? Si la posibilidad de ese déficit es lo que conduce a la comisión a aconsejar el despacho, la acuso de inconsecuencia; y digo de inconsecuencia, porque el Poder Ejecutivo ha propuesto otra solución, que es el impuesto a las herencias, con cuyo proyecto yo discrepo fundamentalmente en la parte constitucional, en cuanto trata de ir a sacar fondos que son propios de las provincias, pero que desde el punto de vista técnico social, sería mucho más procedente que el impuesto a las primeras ventas, porque aquél sería, en definitiva, un impuesto al privilegio y éste es un impuesto al consumo.

La comisión, por intermedio de su miembro informante, en realidad, no nos ha dado la ubi-

cación precisa sobre quien va a recaer el impuesto. Habla en cierto momento del comercio y de la industria y en otro momento de la población.

Yo digo: el impuesto recae sobre el comercio y la industria o recae sobre la población. Vale la pena estudiar las dos situaciones y las dos hipótesis. Si el impuesto recae sobre el comercio o la industria, es, desde luego, un impuesto inconveniente, y digo inconveniente, porque el impuesto no debe ser un instrumento de opresión, sino, por el contrario, de fomento y, en este caso no lo sería, porque el momento y la oportunidad que se busca no es la mejor.

Sabemos perfectamente que el comercio y la industria viene debatiéndose en una situación realmente extraordinaria desde hace cuatro o cinco años a esta parte; que gran parte ha ido a la quiebra, y la que subsiste está trabajando en situaciones penosas, agobiada por el aumento de impuestos, por el impuesto de exportación, por el adicional de aduana, por el impuesto a la renta, por las patentes, y por este otro impuesto que se proyecta en substitución del impuesto a las transacciones.

Por otra parte, la capacidad de consumo de la población ha disminuído notoriamente, y entonces el comerciante, que ve aumentado el costo de producción y de venta de sus artículos, se encuentra con esa capacidad disminuída, lo que lo obliga a abaratar el precio de venta para hacerlo más accesible y para facilitar la circulación de los productos, y resulta que el gobierno en vez de estimular esa circulación, trata de entorpecerla, imponiendo nuevos gravámenes.

Si recae sobre la población, no mejora la situación. Sabido es que la población del país ha visto disminuir sus rentas, y se ha encontrado obligada a reducir sus gastos al mínimo, y en vez de tender el gobierno a abaratar los artículos, los está encareciendo con estos nuevos impuestos; de manera que en ninguna de las dos situaciones el impuesto tiene explicación. Responde únicamente a eso que ya he señalado en la sesión anterior: la voracidad fiscal. La única preocupación es atender las finanzas del Estado, mejor dicho, la situación de la tesorería, olvidándose por completo de la economía del país.

Desde luego que el procedimiento debía ser a la inversa, tratar de desgravar la producción para facilitar la circulación de los productos, y estimular el mayor consumo y es posible, entonces, que con ese mayor consumo y mayor circulación, las rentas del Estado aumentarían. Pero ese procedimiento exige dedicación, ma-

yor trabajo y contracción; de ahí entonces, que se opte por el sistema más sencillo, aplicando impuesto a todos los artículos, para multiplicarlos por el denominador común, para así obtener el resultado global.

[Que el pueblo sufra, que el pueblo experimente esa opresión, que el pueblo siga sintiendo las consecuencias de la crisis y de la voracidad fiscal! Eso no interesa; lo primero es la situación de la tesorería del Estado, el pueblo es secundario; es la inversión del problema. Lo primero de lo primero, debería ser la situación del pueblo, y lo segundo, la situación del gobierno.

El señor miembro informante de la comisión dijo que nos encontramos ante el dilema de mantener el impuesto a las transacciones, que ha dado lugar a tantos reclamos, o substituirlo por este otro impuesto, que presenta características similares a aquél, pero que es mejor.

La cuestión está mal planteada. Si el impuesto a las transacciones es malo, debe suprimírsele y no sancionar este otro, que es su repetición, y que no mejora la situación del consumidor, de la industria y del comercio. Lo que mejora es la situación del Estado, la situación del Fisco, que ha buscado mayor comodidad en la recaudación del impuesto y el mayor producido del mismo. Esa es la única verdad.

El Poder Ejecutivo no se ha preocupado de buscar o de distribuir las cargas del Estado en forma más justa, lo ha preocupado la forma más fácil de hacerse de fondos. Tanto es así que el impuesto derogado representa el 3 por mil y el nuevo impuesto, aun con la rebaja propiciada por el ministerio, significa el 12,5 por mil, de manera que hay una diferencia extraordinaria entre la tasa de uno y otro impuesto.

¿Qué es lo que producirá este impuesto? — y me disculparán los señores senadores que haga números de memoria, constreñidos como estamos a tratar en condiciones precarias el despacho de la comisión.

Según el Ministerio de Hacienda — si la memoria no me es infiel — con la tasa anterior iba a producir 30.000.000 de pesos; según un cálculo de la Unión Industrial Argentina, va a producir 80.000.000 de pesos, más o menos. Con esta rebaja produciría, aproximadamente, 60.000.000, y según el ministerio, 22.500.000 pesos.

Si es exacto el cálculo del ministerio, yo pregunto a los señores senadores ¿es posible extorsionar al pueblo, es posible perseguir al comercio y a la industria con esta gabela que planteará nuevas dificultades, para obtener la

suma de 22.500.000 pesos? ¿No sería más práctico, no sería más beneficioso y justo para todos, gobierno y pueblo, tratar de economizar estos 22.500.000 pesos en el presupuesto, y suprimir para siempre este impuesto tan impopular? Tan impopular, señor presidente, que no ha quedado actividad útil en el país que no haya protestado y proteste acerbamente; las clases más típicamente conservadoras, congregadas en la Bolsa de Comercio y en la Asociación Industrial, han levantado su protesta airada. Sé que se me contestará: no, porque últimamente se han declarado satisfechas, después de la entrevista con el señor ministro; cuando les ha reducido la tasa, ellas se han mostrado conformes.

Pero no nos podemos hacer ilusiones. Se han mostrado conformes como nosotros en este momento. Los senadores de la oposición tenemos que conformarnos ante una situación de hecho, en que, por una votación, se nos obliga a tratar sobre tablas un asunto, así, en una forma improvisada. Se han conformado esos señores de la industria y del comercio, porque no tenían más remedio, porque sabían que se iba a aprobar el proyecto tal como salió del Poder Ejecutivo, y entre pagar la tasa proyectada u obtener un pequeño beneficio, aceptaron lo último, pero no porque consideren que sea una solución conveniente para la industria, para el comercio ni para el pueblo.

Son estas, señor presidente, expuestas improvisadamente, las razones que me mueven a dejar perfectamente puntualizado mi voto en contra del despacho de la comisión, en el proyecto que se debate.

Nada más.

Sr. Ministro de Hacienda. — Pido la palabra.

Después de la amplia discusión habida sobre este proyecto en la Cámara de Diputados y del informe que acaba de hacer el señor miembro informante, senador por Jujuy, me parecería ociosa una extensa exposición demostrando la procedencia de este impuesto y la conveniencia de que sea sancionado en reemplazo de los que caducan.

El señor senador por Entre Ríos lo ha impugnado diciendo que, como él había vaticinado, esta es la consecuencia de la unificación; que la unificación se hace no con el fin de unificar, sino con el de asegurar para la vigencia de las leyes de impuestos a los réditos y a las transacciones, una mayoría parlamentaria.

Es difícil convencerlo de que no es así, porque su apreciación es puramente subjetiva. Cuando se ha probado acabadamente que el

Estado federal pierde dinero con la unificación, aun sancionados estos proyectos, no cabe mayor demostración; y si el señor senador sigue creyendo que lo que hay que comparar es la situación que existiría con la inexistencia de la unificación y de los impuestos, con la que resultaría de la unificación y de estos impuestos, debo respetar su punto de vista, declarando simplemente que no es el que he tenido.

El señor senador por Entre Ríos ha acusado de inconsecuencia a la comisión y esa inconsecuencia estribaría en haber aceptado este proyecto y no otro sometido al Congreso por el Poder Ejecutivo sobre impuesto a las herencias, que mal podría ser tratado por la comisión del Senado, cuando no ha sido todavía considerado por la Cámara de Diputados.

De manera que no cabe hacer sobre el proyectado impuesto a las herencias ninguna consideración; advierto, sí, que el propio senador por Entre Ríos ya lo ha encontrado malo e inaceptable desde el punto de vista constitucional, porque, según dice, el fisco nacional absorbería impuestos de esta naturaleza en las provincias; supone que por esa ley se va a agravar la situación legal actual, en materia de impuesto a las herencias, olvidando que por el proyecto a estudio de la Cámara de Diputados nada cobra ni cobraría la Nación en las provincias por ese concepto.

Pero aquí nos toca a algunos, señor presidente, el papel desgraciado de tener que apoyar impuestos, y a otros la misión, por cierto más simpática, de representar al país y votar en contra de todo gravamen.

Yo no sé si sigue siendo uno de los atributos característicos de los cuerpos representativos, el de representar al contribuyente frente al Estado. Ese fué un concepto propio de las viejas monarquías; pero en las repúblicas modernas en que todos los poderes representamos al país directa o indirectamente, unos y otros cuidamos al contribuyente y unos y otros tenemos que cuidar algo común, que es el tesoro público, que no puede ser vaciado ni puede alimentarse con recursos menores que los necesarios para subvenir a las necesidades comunes. Voracidad fiscal es la nueva denominación vulgar que tiene esa actividad. Pero voracidad fiscal bien calificada sería exigir al pueblo el pago de sumas mayores que las necesarias o si en estos momentos pidiéramos el pago de tributos para lanzarnos en una carrera desenfrenada de gastos innecesarios. Se ha probado hasta la evidencia que esa no es la situación actual; que el gobierno no ha pedido, ni proyectado, ni

aceptado, ni implícita ni expresamente, ningún aumento de gastos que no sea absolutamente indispensable, y que este impuesto reemplaza al de las transacciones.

El impuesto a las transacciones que desaparece era, como se ha dicho con exactitud, de una tasa menor, 3 o/oo, porque esa tasa se aplicaba a las ventas sucesivas y se cobraba cada vez sobre el mayor precio adquirido por la mercadería en cada evolución comercial, mientras que hoy se cobra una sola vez sobre el precio básico, es decir, sobre el más pequeño.

No hay base para creer que este tributo sea mayor que el otro y la prueba está en que el impuesto a las transacciones dió más de 25.000.000 de pesos y éste no dará, probablemente, una suma mayor a 22 ó 23.000.000 de pesos.

¿Que se han calculado 80.000.000 de pesos? Deploro el cálculo. Analizado, se ha probado a sus mismos autores la imposibilidad de una percepción de ese monto ni relativamente aproximada. El impuesto ha sido bien calculado sobre la base de una tasa de 2 %, en 30 a 34.000.000 y se puso 30.000.000 en el cálculo de recursos, contándose con una merma inicial cuantiosa, debida al movimiento de resistencia que todo el país ha presenciado.

El gobierno se ha esforzado en acallar las protestas de los círculos comerciales e industriales, que siempre creyó infundadas. Ha tratado con ellos y con la mayor buena voluntad, ha escuchado sus observaciones, ha tomado nota de sus pedidos, ha discutido con ellos detalles del asunto y ha llegado a esta conclusión: que el impuesto rebajándose la tasa a 1,25 % resulta aceptable en general para todo el mundo y en especial para los grandes núcleos industriales y comerciales, que se aprestan a colaborar a la percepción de este impuesto. Esa colaboración de los comerciantes y de los industriales, es para el gobierno un aporte apreciable, que compensa el sacrificio hecho con la baja de recursos, no porque este impuesto vaya a dar todos esos recursos, sino porque algunos otros gravámenes, especialmente el impuesto a la renta, que se cobraba con dificultad, van a percibirse en adelante con mayor regularidad.

Por otra parte, en la planilla esquemática, hecha sobre la base de 2 %, basada en datos reales, se calcula una percepción total de 34,3 millones, de los cuales 3,6 millones corresponden a la exportación, de acuerdo a la tasa hoy vigente, que no se modifica.

Quedan, pues, \$ 30.700.000 como producido del impuesto a las importaciones y ventas de

mercaderías de producción nacional, y si se reduce de 2 a 1,25 % la tasa, aquella cantidad se convierte en 19.200.000, que sumados a los 3.600.000 de la exportación, resultan 22.800.000 pesos. Comparados esos 22.800.000 pesos con los 29.200.000 del cálculo de recursos, hacen una merma de 6.400.000 pesos.

Pero como parte de esa merma la soportan las provincias a quienes corresponde 17 1/2 % del producido de este tributo, hay que restar 1.100.000 para obtener la cantidad que en definitiva pierde nuestro Tesoro nacional. Se llega así a una cifra aproximada de pesos 5.300.000 que sería la merma previsible. Es un cálculo aproximado, no seguro, porque no son seguras en esta materia las predicciones, pero si bastante verosímil, por cuya razón el Gobierno debe propiciar la reforma de la sanción de la Cámara de Diputados que modera el impuesto con las ventajas que he indicado.

Nada más que por esto, señor presidente, el gobierno pide al Honorable Senado quiera modificar la sanción de la Cámara de Diputados prestando su aprobación al despacho que ha informado el señor senador por Jujuy.

Sr. Palacios. — Pido la palabra.

Después de la amplia intervención que han tenido los representantes del Partido Socialista en la otra Cámara, cuando se consideró este asunto, yo me concretaré a dejar constancia de mi voto en contra, en nombre de los senadores por la Capital. Agregaré, solamente, que al entrar a este recinto he recibido una nota de una de las cámaras industriales de la Capital en la que después de hacer extensas consideraciones sobre la inoportunidad del impuesto que tratamos, se consignan estas palabras significativas: «Es posible, si se aprueba el tributo, que sea menester rebajar los sueldos y jornales, medida muy lamentable, por cierto porque empobreciendo al pueblo consumidor, habrá más miseria de la que existe».

Yo no sé, señores senadores la importancia que puedan tener estas palabras del presidente de una de las cámaras industriales del país, pero de todas maneras ellas revelan, de un modo muy claro, el estado de espíritu de los industriales que si no pueden hacer recaer el impuesto sobre los consumidores, se desquitarán seguramente con los obreros.

La perspectiva, señores senadores, no es muy halagadora, por cierto.

Considero este nuevo tributo como una consecuencia de la mala política impositiva a que me he referido en una sesión anterior y que contribuirá aun más, a perjudicar al pueblo.

poniendo trabas a las actividades necesarias para el desarrollo de la economía.

Por estas razones dejo constancia del voto en contra, de los senadores por la Capital, respecto de este impuesto a las ventas con el que se pretende cubrir el déficit producido por la supresión del impuesto a las transacciones.

Sr. Campos. — Pido la palabra.

No voy a ocuparme de cada uno de los puntos que ha abarcado la exposición del señor senador por Entre Ríos, al impugnar el despacho de la comisión, pero si he de referirme a una situación especial para desvirtuar cualquier cargo que pudiera mantenerse con respecto a la Comisión de Presupuesto.

Declaro categóricamente, señor presidente, que no hay en la actitud asumida por la comisión ninguna inconsecuencia. Se trata sencillamente de una ley de carácter impositivo, que viene a esta Cámara con el propósito de sustituir a otra; viene con el objeto de establecer un impuesto de más fácil aplicación y de mayor comodidad para los contribuyentes, descartando los inconvenientes que trae aparejado el impuesto a las transacciones, cuya incomodidad para ellos ha sido pública y se ha hecho conocer durante todo el tiempo de su aplicación.

El impuesto a las transacciones grava a todo acto o contrato, aunque no sea una venta y aunque ella no tenga carácter comercial. Es lógico que siendo éste el carácter general del impuesto a las transacciones, vaya directamente a agravar hasta las más pequeña operación de los comerciantes. Es indudable, entonces, que es esta situación la que ha provocado una resistencia general en toda la República, resistencia que ha determinado un decreto del Poder Ejecutivo que está a consideración de la Comisión de Presupuesto y que será despachado oportunamente.

Es indudable, señor presidente, que se trata de dos puntos de vista diferentes. Por el uno se suprime el impuesto a las transacciones con todas sus incomodidades; por el otro se lo sustituye por un gravamen equivalente y todavía con un pequeño margen de disminución en su posible rendimiento como lo acaba de expresar el señor ministro de Hacienda. De manera, que la actitud de la comisión, ni siquiera ha sido dudosa, pues debía inclinarse por la sanción de este proyecto, ya que ello iba a redundar en beneficio de los contribuyentes.

Esa es la verdadera situación de la Comisión de Presupuesto.

Se ha calculado el rendimiento de este impuesto en 30.000.000 de pesos. También en 30.000.000 de pesos estaba calculado el impuesto a las transacciones. De manera, que no hay ninguna diferencia y por el contrario, con la nueva reducción que propicia el Poder Ejecutivo y que la comisión ha aceptado, reduciendo su monto a 1 y $\frac{1}{4}$ %, el fisco nacional se perjudica más o menos en 8 ó 9.000.000 de pesos, es decir, que se ha procurado, aunque sea con mayor sacrificio del erario fiscal, de satisfacer los intereses generales del comercio y de la industria y en esta actitud no puede decirse que ha habido inconsecuencia.

Por otra parte, el señor senador por Entre Ríos ha manifestado que con el 2 % y aun con la nueva reducción al 1 y $\frac{1}{4}$ % en el monto del impuesto, el gravamen es pesado y que, en realidad, no puede contemplarse con frialdad en estos momentos en que la crisis abruma a las industrias y al comercio. Pero si el impuesto a las transacciones gravaba numerosas operaciones desde el momento en que el producto o mercancía salía al mercado o iba a manos del consumidor, ¿cómo pensar que este impuesto no sea más ventajoso que aquél?

De manera, pues, que esas numerosas operaciones, todas ellas gravadas por el impuesto a las transacciones, son perfectamente equivalentes al impuesto único sancionado por esta ley. Se trata de gravar la primera venta en una forma que haga perfectamente aplicable el impuesto, mientras que el de las transacciones, en la forma que lo establecía la ley, gravaba pequeñas operaciones comerciales haciendo poco menos que imposible la aplicación del impuesto, pues nuestro sistema monetario no permitía su graduación en esas condiciones.

Esta es, necesariamente, la situación que debe contemplarse; y esa es la razón que ha tenido la comisión para despachar favorablemente el proyecto.

Nada más.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Matienzo. — Pido la palabra.

Desearía saber si se puede conocer el texto del proyecto, pues la Secretaría no lo ha leído y estamos discutiendo sobre una cosa que no conocemos y hemos sido sorprendidos con la moción de tratarlo sobre tablas.

Sr. Presidente. — Será atendida de inmediato la indicación del señor senador por Tucumán.

Sr. Matienzo. — Continúo, señor presidente. La rápida lectura que el señor secretario acaba de hacer no basta, naturalmente, para que un senador consciente forme opinión fundada sobre esta materia. Pero, sin embargo, yo noto que este impuesto no está indicado en la Constitución, y que lo primero que debía buscarse, antes de fundarse un proyecto de impuesto nuevo, es el artículo de la Constitución en el cual se autorice.

El artículo 4º de la Constitución, dice: «El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del tesoro nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional; de la renta de correos; de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso general, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decreta el mismo Congreso para urgencia de la Nación o para empresas de utilidad nacional».

¿En cuál de estos casos se encuentra este impuesto? En ninguno, porque no es un derecho de aduana, ni renta de correos, ni venta o locación de tierras de propiedad nacional, ni empréstito, ni es tampoco ninguna de las demás contribuciones que equitativamente y proporcionalmente a la población imponga el Congreso general, porque esto no es equitativo ni proporcional a la población.

Hay otro artículo más, el 67, que, en su inciso 2º, autoriza al Congreso a «imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan».

Tampoco cabe en esta definición el impuesto que se acaba de proponer. Por consiguiente, señor presidente, se trata, a mi modo de ver, de una de las tantas deformaciones que nuestras instituciones vienen sufriendo de un tiempo a esta parte. Se va, poco a poco, marchando del federalismo al unitarismo solapado, o más o menos franco, según el carácter de la persona que inicia la medida. Pero vamos marchando decididamente al unitarismo. Las provincias van perdiendo sus facultades, porque estos impuestos que no están establecidos a favor de la Nación por la Constitución, corresponden a las provincias, en virtud del artículo 104, que dice así: «Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal».

Con motivo de la llamada ley de unificación de impuestos internos, se ha dicho que las provincias no eran forzadas a aceptar esa ley; que podían aceptarla libremente, lo que importa decir, señor presidente, que las provincias tienen la facultad de ceder libremente, por negociaciones más o menos abiertas o diplomáticas, las facultades que la Constitución les da. Ceder facultades inalienables no es propio de ninguna provincia que se estime, ni de Nación ninguna que se crea República. Las provincias podrían ceder también así, no solamente la facultad de establecer impuestos, sino también la facultad de nombrar gobernadores o la facultad de nombrar legisladores, porque tan facultad es una como la otra.

Yo no puedo improvisar, después de la rápida lectura de este proyecto, un estudio detenido sobre la materia, y me limito a esas objeciones que acabo de hacer, que bastan para que conste mi voto en contra en todos los artículos de este proyecto.

Nada más.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en general, el despacho de la comisión.

Sr. Eguiguren. — Pido que la votación sea nominal.

Sr. Presidente. — Se va a tomar la votación nominal.

—Votan por la afirmativa, los señores senadores: Serrey, Patrón Costas, Galíndez, Castillo, Arancibia Rodríguez, Campos, Lubary, Santamarina, Vidal, López Peña, Rother y Landaburu.

—Votan por la negativa, los señores senadores: Sánchez Sorondo, Eguiguren, Palacios, Villafañe, Matienzo y Bravo.

Sr. Secretario (Figueroa). — Han votado 12 señores senadores por la afirmativa y 6 por la negativa.

Sr. Presidente. — En discusión, en particular.

—Se leen y aprueban sin observación, los artículos 1º y 2º.

—Se lee el artículo 3º.

—No habiendo quórum para votar, dice el:

Sr. Matienzo. — Mientras se consigue quórum, me voy a permitir indicar se inserte en el

Diario de Sesiones la petición hecha por la Comisión de Militares en retiro del Ejército y la Armada, sobre rebaja de asignaciones. (1)

—Se completa el quórum, habiendo asentimiento para la indicación del señor senador por Tucumán.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 3º.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se votan y aprueban los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º.

—Se lee el artículo 9º.

Sr. Rothe. — Pido la palabra.

En el proyecto, en revisión, estaba incluida la cal entre las mercaderías exentas del impuesto creado por esta ley. En la Cámara de Diputados se dieron razones atendibles para justificar esta excepción; no conozco las que pudo haber tenido la comisión para suprimirla, tanto más, cuanto que es notorio que este artículo está castigado por otros impuestos y fletes altos, lo que encarece su precio.

Desearía oír los motivos que ha tenido la comisión para aconsejar esta modificación.

Sr. Campos. — Pido la palabra.

La comisión ha resuelto introducir en este artículo una modificación.

La sanción de la Cámara de Diputados establecía que quedaban eximidos del pago del impuesto, los ladrillos, la cal, la arena y los materiales de construcción en general.

Es tan amplia esta acepción, señor presidente, que importaba una imposibilidad material la de establecer con precisión qué artículos quedaban eximidos del pago del impuesto. Es enorme la lista de los materiales de construcción que podrían quedar comprendidos dentro de esta enunciación general.

Tengo aquí la «Revista del Arquitecto Constructor», y en la primera página existe un detalle de los materiales de construcción, lista que es extensísima. Están los aceros, los andamios, los adoquines, alquitrán, arena, artefactos sanitarios, los asfaltos, cerámica, las cerraduras, los azulejos, las bañaderas, etcétera. En fin, la lista es enorme.

Y como la excepción a este respecto es general, si nos atenemos al texto del proyecto venido en revisión, sería demasiado amplia la excepción. Por eso, la Comisión de Presupuesto ha entendido que, tal como ha venido

el proyecto, importaba no sólo desequilibrar el propósito que se ha tenido al sancionar esta ley, sino también quebrar su aplicación y hacerla en realidad imposible ante los hechos, tal cual se presentaban.

Es ésta la razón en virtud de la cual la Comisión de Presupuesto ha hecho la eliminación de todos esos artículos.

Tengo, además, señor presidente, porque la razón que se ha invocado en la Cámara de Diputados es la de abaratar la vivienda, tengo, repito, en mi banca, varios ejemplos que demuestran que no hay tal abaratamiento de la vivienda.

Si se trata de una vivienda de 5.000 pesos, —vivienda obrera— vemos que si el terreno vale 1.000 pesos y en materiales de construcción se emplean 2.400 pesos, o sea el 60 %, y en la mano de obra 1.600, o sea el 40 %, para tener una casa que importe un total de 5.000 pesos, el impuesto suprimido por la comisión importaría, en total, la suma de \$ 30 para esa edificación. Si se trata de una casahabitación de 12.000 pesos, el impuesto la gravaría en \$ 26,25. Si fuera una vivienda de 25.000 pesos, el gravamen sería de \$ 127,50; y si se tratara de una edificación de 1.000.000 de pesos, el gravamen sería de 6.125 pesos. En realidad, no aumentaría casi nada el valor de la edificación, de manera que no habría razón alguna para desequilibrar las entradas que van a derivar de la sanción de este impuesto, frente a una situación que, en realidad, no comprometería en forma alguna la situación actual, ni abarataría la vivienda como se ha expresado.

Nada más.

Sr. Rothe. — Pido la palabra.

Las dos razones que ha expresado el señor miembro informante de la comisión me parecen insuficientes. La de carácter general, con respecto a la imposibilidad de fijar los artículos sujetos a exención, por los términos en que está concebido el artículo del proyecto en revisión, podría ser aceptada como una modificación de forma a ese artículo, para precisar o individualizar las mercaderías eximidas; pero, de ninguna manera para la cal, los ladrillos y la arena.

En lo que se refiere al segundo argumento, a que el impuesto grava en realidad en una mínima parte todos los materiales sujetos al impuesto, en cuanto puede el impuesto ser sufrido por el particular, con esa forma de argumentar, habría, realmente, pocos gravámenes que pudieran considerarse pesados.

Por mi parte, votaré en contra del despacho de la comisión, si acaso no se modificara el

(1) Véase pág. 174.

Diciembre 27 de 1934

CAMARA DE SENADORES

66ª Reunión. 8ª Sesión extraordinaria

texto, excluyendo del impuesto a la cal, ladrillos y arena.

Nada más.

Sr. Campos. — Pido la palabra.

La comisión, señor presidente, no acepta que se incluya la cal entre los productos que deben eximirse del pago del impuesto, porque entiende que tanto la cal, como la arena, los ladrillos y demás materiales de construcción, deben todos pagar, porque en conjunto no representan ningún mayor gravamen a la construcción de casas, tanto obreras como aristocráticas.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se votan y aprueban los artículos del despacho.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el despacho.

Sr. Galíndez. — Hago indicación, señor presidente, para que se comunique de inmediato a la Cámara de Diputados este proyecto.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Habiendo asentimiento, así se hará.

Se va a considerar el asunto número 1 del orden del día número 47.

7

CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL PUERTO DE QUEQUEN

—Se lee:

Despacho de la comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Obras Públicas ha tomado en consideración el proyecto de ley venido en revisión, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de \$ 5.760.000 moneda nacional en la construcción de varias obras en el puerto de Quequén; y, por las razones que se dan en el informe escrito que se acompaña, os aconseja le prestéis vuestra aprobación. Sala de la comisión, Diciembre 19 de 1914.

Atanasio Eguiguren. — Juan J. Luby.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la cantidad de cinco millones setecientos sesenta mil pesos (\$ 5.760.000 m.n.) en la construcción de las siguientes obras en el puerto de Quequén; prolongación de muro para ultramarinos; espigones de atraque; defensas interiores; defensas sobre el mar; calzadas; alcantarillados y desagües; puente ferroviario sobre Quequén; parrillas de vías de recepción, clasificación y trabajos para la margen derecha; dragado de acceso; antepuerto y pie de los muelles a 28º; edificios para oficinas y pabellones sanitarios.

Art. 2º — La suma antes indicada se obtendrá con la emisión de títulos «Puerto Quequén», del cinco por ciento (5 %), de interés anual y uno por ciento (1 %), de amortización acumulativa, tipo de aforo no menor de noventa por ciento (90 %), cuyos servicios se atenderán con el producido del puerto hasta su extinción.

El importe líquido de las emisiones anuales anticipadas no podrá exceder al que represente el importe de los trabajos dentro del programa previsto en cada año.

Art. 3º — Las obras se llevarán a cabo, en el término de tres años, en cualquiera de las siguientes formas:

- a) Administrativamente, cuando puedan utilizarse económicamente planteles del Estado o así lo aconsejaren circunstancias de otro orden;
- b) Por licitación pública.

Art. 4º — El Poder Ejecutivo podrá anticipar de rentas generales, cuando fuere indispensable y con cargo de reintegro, las sumas correspondientes a emisiones anticipadas que no se efectuaran por cualquier causa.

Art. 5º — Anualmente el Poder Ejecutivo dará cuenta al Honorable Congreso de las obras que se ejecuten, especificando formas de construcción y financiación.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

MANUEL A. FRESCO.
Carlos González Bonorino.

INFORME

A fines del año 1932 el Poder Ejecutivo sometió al Congreso un proyecto de ley dispo-